



COMITÉ PARA LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

ACTA RELATIVA A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 08/2020

En Mexicali, Baja California, siendo las catorce horas del día cuatro de febrero de dos mil veinte, se reunieron en la sala de sesiones del Consejo de la Judicatura del Estado, los integrantes del Comité para la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Maestro Salvador Juan Ortiz Morales, quien preside el Comité, el Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, el Consejero de la Judicatura, Licenciado Francisco Javier Mercado Flores, la Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura, Contador Público Rosaura Zamora Robles, el Director de la Unidad Jurídica y Asesoría Interna, Licenciado Jesús Ariel Durán Morales y la Directora de la Unidad de Transparencia, Maestra en Derecho Elsa Amalia Kuljacha Lerma, Secretaria Técnica del Comité, para celebrar la sesión extraordinaria 08/2020.

La Secretaria del Comité da cuenta con el quórum de asistencia al Presidente, quien declara su existencia, por lo cual se inicia esta sesión. Acto continuo sometió a sus integrantes el orden del día en los siguientes términos:

ORDEN DEL DÍA

- I. Aprobación del orden del día.**
Por unanimidad se aprobó en sus términos.
- II. Asuntos a tratar:**

PRIMERO. Procedimiento de clasificación de la información y autorización de versiones públicas 06/2020, realizado por las Juezas Cuarto y Sexto Penal del Partido Judicial de Tijuana, derivado de las solicitudes de información registradas en la Plataforma Nacional de Transparencia con los números de folio 00046820, 00047920, 00046920 y 00047020, todas de fecha diecisiete de enero de dos mil veinte.

SEGUNDO. Procedimiento de ampliación de plazo para dar respuesta 07/2020, derivado de la solicitud de información registrada con el número de folio 00069020, en la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha veintitrés de enero de dos mil veinte, solicitado por la Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura y por la Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Vistos los proyectos de resolución presentados por la Secretaria Técnica, el Presidente somete a discusión el asunto y con las facultades que se le confieren al Comité, en las fracciones I y II del artículo 54, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California; 11 y 13 fracción XIII, del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California, los aprobaron por unanimidad de votos por sus propios y legales fundamentos, por una parte, la resolución relativa a la clasificación de la información de carácter confidencial, realizada por las Titulares de los Juzgados Cuarto y Sexto Penal del Partido Judicial de Tijuana, quedando en consecuencia, autorizadas las versiones públicas correspondientes. Por otro lado, se autoriza la ampliación de plazo solicitada por la Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura y por la Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas, CONSIDERANDO QUE:

PRIMERO. En cuanto al procedimiento de clasificación de la información y autorización de versiones públicas 06/2020, realizado por las Juezas Cuarto y Sexto Penal de Tijuana, derivado de las solicitudes de información realizadas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, registradas con los números de folio 00046820, 00047920, 00046920 y 00047020, todas de fecha diecisiete de enero de dos mil veinte, tenemos:

1) Antecedentes:

1.1) En las solicitudes de referencia se pide: **Folio 00046820**, del Juzgado Cuarto Penal de Tijuana, las versiones públicas de las declaraciones de las denunciadas del delito de violación, correspondientes a las causas penales 565/2010, 682/2014, 437/2010, 110/2011, 222/2009, 333/2008, 82/2012, 1839/2012, 2295/2014 y 285/2011; **Folio 00047920**, del Juzgado Séptimo Penal de Tijuana, las versiones públicas de las declaraciones de las denunciadas del delito de violación, correspondientes a las causas

penales 850/2013 y 746/2010; Folios 00046920 y 00047020, del Juzgado Sexto Penal de Tijuana, las versiones públicas de las declaraciones de las denunciadas del delito de violación, correspondientes a la causa penal 331/2008.

En todas las solicitudes de referencia, se manifiesta que la información es requerida con fines de investigación académica, por lo que se solicita no sean suprimidos los datos correspondientes a edad, grado de escolaridad, ocupación y cualquier otro que permita dar cuenta del perfil socioeconómico de la víctima.

1.2) Realizado el requerimiento a los órganos jurisdiccionales competentes, mediante oficios girados el 21 de enero del presente año, las Titulares de los Juzgados Cuarto y Sexto Penal de Tijuana, por oficios 60-4, 67-4 y 16/20/P, remiten 9 versiones públicas de las declaraciones de las denunciadas dentro de las causas penales de interés del peticionario, en las cuales se suprimieron los datos personales que se clasificaron como confidenciales, cubriendo el espacio correspondiente mediante la utilización de una línea negra.

1.3) Recibidas las versiones públicas citadas, la Unidad de Transparencia verificó si la supresión de los datos personales se realizó de acuerdo a la normatividad aplicable. Hecho que fue lo anterior, se turnaron los documentos y el proyecto de resolución al Comité de Transparencia, para su análisis.

2) De las versiones públicas elaboradas. Los integrantes del Comité, atendiendo a los artículos 175 y 177 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, por tratarse de solicitudes en las que se ve involucrada información confidencial, procedieron a determinar si los datos suprimidos en los documentos que se analizan, son o no confidenciales, aplicando la prueba de daño a que se refiere el artículo 109 de la Ley local de transparencia y acceso a la información pública, lo que se hizo tomando en cuenta que:

En principio, toda información generada, administrada, adquirida o en posesión de Poder Judicial, por virtud del ejercicio de sus competencias, funciones y atribuciones, es pública, con las salvedades establecidas en la propia Ley. La versión pública de

documentos y resoluciones, permite la consulta de todo interesado en la actuación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, pues se elaboran suprimiendo la información considerada confidencial o reservada, lo que **requiere como acto conjunto a su elaboración, emitir un criterio que la clasifique como restringida al público.**

Por otro lado, considerando que en el caso concreto, el acto de clasificación se hace con motivo de la recepción de solicitudes de acceso a la información y que ello exige como ya quedó asentado, la exposición de **los motivos que la justifiquen y aplicar la prueba de daño**, esto implica por una parte, precisar la normatividad que expresamente le otorga el carácter de confidencial a la información omitida y por otra, determinar si con su difusión se causaría un serio perjuicio al interés o intereses públicos tutelados; es decir, la existencia de una expectativa razonable de daño presente, probable o específico, a lo que la doctrina ha denominado la prueba de daño.

2.1) Del acto de clasificación de la información. El artículo 106 de la Ley en cita, indica que la clasificación es un proceso mediante el cual el sujeto obligado determina, que la información en su poder encuadra en alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad.

En el caso concreto, para efectos del acto de clasificación, encontramos como elementos objetivos, los siguientes:

2.1.1) Las versiones públicas de mérito fueron elaboradas en observancia al marco normativo que rige en la materia, esto es, a lo establecido en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4, fracciones VI, y XII, 106, 107, 109 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California; 4 fracciones III, VI, IX, 10 fracciones IX y XVIII, 55, 73, 77, 82, 87 y relativos del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California.

2.1.2) De los propios documentos en estudio, se desprende que no existe consentimiento expreso de los titulares de los datos personales suprimidos; esto es, de

los particulares a los que se hace referencia en las declaraciones solicitadas, lo que resulta necesario **para que puedan ser comunicados a terceros**, como se exige en el diverso numeral 176 del Reglamento de la Ley local de la materia.

2.1.3) En virtud de lo anterior y **como consecuencia de la aplicación de la normativa reseñada**, en la elaboración de las versiones públicas que nos ocupa, **se suprimieron los datos personales de los particulares participantes de los procesos penales cuyas declaraciones son de interés del peticionario**, lo cual se justifica atendiendo la obligación legalmente establecida de proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, dispuesta por la Ley estatal de la materia, en el artículo 16, fracción VI, **considerando que es innegable, que la divulgación de los datos suprimidos representa un perjuicio real y significativo para sus titulares y del interés público de tutelar la vida privada y la intimidad de los particulares**, ya que se trata de información que no es de interés general; es decir, **los datos omitidos en las causas penales se refieren a:** los nombres de las ofendidas, de familiares, de amistades y de los acusados, edad, domicilios, los relativos al estado civil, origen, ocupación y señas particulares, que de acuerdo a la fracción VIII del artículo 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, **información de carácter confidencial**, acorde a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, la que en su artículo 4, fracción XII, establece que se entenderá por información confidencial: *"La información en posesión de los sujetos obligados que refiera a datos personales; (...) por lo que no puede ser difundida, publicada o dada a conocer, excepto en aquellos casos que así lo contemple la Ley General o la presente Ley"*, lo que se complementa con lo dispuesto en el precepto normativo 172, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, que a la letra reza: *"Se consideran datos personales, de manera enunciativa más no limitativa: la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física o jurídica identificada o identificable, tales como el nombre, número telefónico, edad, sexo, registro federal de contribuyentes, clave única de registro de población, estado civil, domicilio, dirección de correo electrónico, origen racial o étnico, lugar y fecha de nacimiento, lugar de origen y*

nacionalidad, ideología, creencias o convicción religiosas, filosófica, política o de otro género; los referidos a las características físicas, morales o emocionales, preferencias sexuales, vida afectiva o familiar, o cualquier otro referente al estado de salud físico o mental, datos laborables, idioma o lengua, escolaridad, patrimonio, títulos, certificados, cédula profesional, (...) huellas dactilares, firma autógrafa (...)”.

2.1.4) **De la prueba de daño.** Atendiendo a los diversos numerales 175 y 177 del Reglamento de la Ley estatal de la materia y considerando que la clasificación se hace con motivo de la recepción de solicitudes de acceso a la información pública del Poder Judicial del Estado, se procede a la exposición de los motivos que la justifiquen, mediante la aplicación de la prueba de daño, de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley estatal, en la Ley General de Transparencia, el Reglamento de la Ley local y los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y demás disposiciones aplicables. En primer lugar, resulta pertinente citar el artículo Segundo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que indica que **se entenderá por “Prueba de daño: la argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados tendiente a acreditar que la divulgación de la información lesiona el interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla”.**

Así las cosas y, dada la obligación de demostrar de manera fundada y motivada, que la divulgación de información lesiona un bien jurídico tutelado por tratarse de información concerniente a una persona física o jurídica identificada o identificable y que el daño que puede producirse con su publicidad, es mayor que el interés de conocerla, **se determina que al tratarse de datos personales de carácter confidencial protegidos por la Ley y que no se cuenta con la autorización de los titulares de los mismos, para su entrega o divulgación, los datos que se omiten deben clasificarse como confidenciales y restringir su acceso.**

Efectivamente, con la aplicación de la prueba de daño, como sujeto obligado se debe justificar conforme al artículo 109 de la Ley de transparencia estatal, que: I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o de la seguridad nacional. A este respecto cabe decir que liberar la información, **de los sujetos privados que intervienen en las causas penales de interés para el solicitante, representa un riesgo real de injerencia de toda índole en sus vidas privadas, no autorizada, de ahí que no pueda liberarse la información, privilegiando el derecho a la intimidad de los particulares;** II. El riesgo o perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda. Del análisis del punto anterior, se advierte que **el daño que se pudiese causar a los particulares al divulgar sus datos personales, supera el interés público de que se conozcan, pues no se puede suponer ningún interés público de liberarse, por lo que la clasificación de confidencialidad debe persistir, pues se reitera, que no se cuenta con el consentimiento necesario de los particulares para la liberación de sus datos;** III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. En este caso concreto, **la limitación al derecho de acceso a la información es proporcional a la protección de la intimidad de los particulares y es el único medio para evitar el perjuicio, pues frente al marco constitucional vigente, en términos del artículo 1^{ro} de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta autoridad debe dar igual tratamiento en la protección de los derechos fundamentales, tanto del solicitante de la información como de los sujetos de quienes se deben proteger sus datos personales.**

3) **De la aprobación del acto de clasificación y autorización de las versiones públicas elaboradas.** En virtud de lo fundado y motivado en los apartados anteriores, el Magistrado Presidente somete a la consideración de los integrantes del Comité el proyecto estudiado, quienes por unanimidad de votos **ACUERDAN: Aprobar la clasificación de la información de carácter confidencial, consistente en los datos personales de los participantes en los procesos penales, cuya declaración es de interés del peticionario, datos que se refieren a los nombres de las ofendidas, de familiares, de amistades y de los acusados; edad, domicilios y los relativos al estado civil, origen, ocupación y señas particulares, de lo cual derivan las versiones públicas elaboradas por**

las Titulares de los Juzgados Cuarto y Sexto Penal del Partido Judicial de Tijuana, por ende, quedan autorizadas dichas versiones públicas, por las razones y fundamentos expuestos con anterioridad.

SEGUNDO. Por lo que hace al **procedimiento de ampliación de plazo para dar respuesta** 07/2020, derivado de la solicitud de información, registrada con el número de folio 00069020, de fecha 23 de enero de 2020, solicitado por la Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura y por la Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas, encontramos que:

1) Antecedentes:

1) Mediante la solicitud de referencia se pide: 1.- *se informe, especificando y aclarando si es cierto que del sueldo devengado por los trabajadores los descuentos autorizados por ¿los mismos son entregados en tiempo y forma cuando se aplican? Es decir si un trabajador gana por poner un ejemplo 4000 pesos catorcenalmente y trae descuentos de 200 de fondo de pensión (para jubilarse) 500 de caja de ahorro, 200 de seguro personal (médico o automovilístico), ¿estos descuentos se entregan debidamente a cada una de las instituciones o a quienes competen en tiempo y forma al aplicarse el descuento? Es decir en el ejemplo el trabajador devenga 4000 y posterior a los descuentos le llegaría un pago por 2800 pesos y el poder judicial debería y está obligado a enterar los 1200 en tiempo y forma, estos y me refiero a los descuentos se enteraron y cuánto tardan en entregarlos respectivamente, quiero y solicito una respuesta clara, y que se compruebe con la documentación que lo acredite mediante copias, no una simple respuesta de, si, se entregan como acostumbran. Es bien sabido que en el poder judicial no han entregado aún y cuando se le hace los descuentos al trabajador de fondo de pensión a issstecali aún y cuando se hayan descontado al trabajador, es bien sabido que no se han entregado las aportaciones a las cajas de ahorro aún y cuando se hayan descontado al trabajador, es bien sabido que no se han entregado los descuentos a los diversos seguros aún y cuando se hayan aplicado al trabajador. Esto implica que el poder judicial es omiso y responsable, por lo cual quiero que se conteste lo siguiente:* 2.- *¿el poder judicial ha sido omiso por realizar los pagos a ISSSTECALI del fondo de pensión?* 3.- *¿El poder judicial ha sido en enterar los pagos a cajas de ahorro en tiempo y forma y se ser así cuánto*

interés paga a las mismas por no enterarlos, y si no paga interés el motivo por el cual? 4.- ¿El poder judicial ha sido omiso en enterar en tiempo y forma el pago a seguros personales de los trabajadores (médicos y automovilísticos) y que responsabilidad asume ante tal hecho? Para que quede más claro solicito respuesta y la siguiente documentación de los departamentos de contabilidad, presupuestos y nóminas: 5.- fecha de las catorcenas en que se pagó a los trabajadores en los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2019 y enero de 2020, y fechas en qué se enteraron si es que lo hicieron con documentación anexa y comprobable en qué se hicieron y enteraron los descuentos correspondientes o aportaciones de las mismas catorcenas a issstecali, a cajas de ahorro y los diversos seguros. 6.-¿Qué responsabilidad asume el poder judicial si a un trabajador se le descuenta el seguro correspondiente y sufre un accidente y el seguro le niega la póliza o servicio por qué el poder judicial omitió el pago aún y cuando al trabajador ya le aplicaron el descuento? ¿Qué responsabilidad asume el poder judicial por no enterar en tiempo y forma los pagos a cajas de ahorro, motivo por los cuales no hay préstamos ni intereses generados, el dinero es de los trabajadores no del poder judicial, que responsabilidad asume el poder judicial ante tales hechos? ¿Cuánto paga de interés a las cajas de ahorro por cada catorcena que tarda en enterar los descuentos, en caso de no pagar interés el motivo legal por lo cual no lo hace? ¿Qué responsabilidad asume el poder judicial por obstaculizar el pago del fondo de pensión en tiempo y forma a issstecali para el derecho de los trabajadores a una pensión?

2) La Unidad de Transparencia inició la búsqueda de la información solicitada, requiriendo de ella a los funcionarios correspondientes, mediante oficios girados el 24 de enero del año en curso.

3) Ante el requerimiento hecho, las Titulares de la Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura y la Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas, por oficios números OM-037/2020 Y CONT-070/2020, recibidos el día 30 de enero del presente año, solicitan la ampliación del plazo para otorgar respuesta, por diez días hábiles adicionales, manifestando que con fundamento dispuesto por los artículos 53 y 54 fracción II, en relación con el diverso 125 de la Ley de Transparencia y el Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, "(...) respetuosamente, me permito solicitar por su conducto al Comité de Transparencia ampliación de 10 días del plazo de respuesta. Ello con el fin de dar

el debido cumplimiento dado que para proporcionar la información solicitada, es necesario una búsqueda exhaustiva y detallada en diversos expedientes y sistemas requiriendo tiempo adicional para revisión y organización de la misma para estar así en posibilidad de remitirla”.

4) **Vistas las razones vertidas** por las funcionarias citadas, **este Comité las estima suficientes y justificadas** para conceder la ampliación de plazo solicitada, considerando que en el caso concreto habrá de atenderse lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley estatal de la materia, que reza: ***“Toda información pública, generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo cual se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos posibles”***, por lo que resulta pertinente que los órganos mencionados, **realicen la búsqueda exhaustiva y razonable de la información requerida** y previo el análisis de su contenido determinen la posibilidad de entregarla por ser pública y estar disponible, en su caso mediante versiones públicas elaboradas conforme a la Ley de la materia y demás ordenamientos aplicables, **a fin de respetar y colmar el derecho del acceso a la información que tiene el peticionario; o bien, en su caso declarar la inexistencia de la información requerida**, atendiendo para ello los imperativos establecidos en los artículos 12, 13, 14, 131 y 132 de la citada Ley, sin olvidar que se presume que la información debe existir, si se refiere a las facultades, competencias o funciones de dichos órganos y la obligación que tienen como sujeto obligado por la Ley de documentar todo acto que derive del ejercicio de dichas facultades, competencias o funciones, o demostrar lo contrario, como se asienta en el artículo 14 mencionado.

Hecho el estudio anterior, el Magistrado Presidente somete a votación de los integrantes del Comité el proyecto en estudio, quienes por unanimidad de votos **ACUERDAN**: Que las razones y circunstancias que motivan las solicitudes de ampliación de plazo, se consideran suficientes y justificadas, conforme a lo establecido por el artículo 125 de la Ley de la materia, que establece: ***“La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de diez días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla. Excepcionalmente, el plazo referido en el***

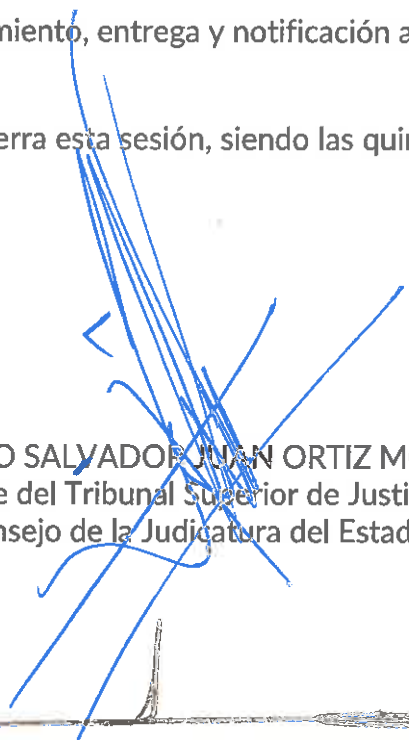
párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento”, por lo que es de aprobarse la ampliación de plazo solicitada por las Titulares de la Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura y por la Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas, hasta por diez días más, contados a partir del día siguiente hábil al vencimiento del plazo original para otorgar respuesta por este Sujeto Obligado, a fin de que dentro del plazo ampliado, se realice una búsqueda exhaustiva y razonable de aquella información que esté disponible para colmar el derecho de acceso del peticionario a los datos solicitados y, previo su análisis, se determine la posibilidad de entregarla por ser pública, observando para ello la normativa de protección de datos personales, por conducto de la Unidad de Transparencia, la que recibirá la información, la procesará y entregará al solicitante; o bien, declare en su caso su inexistencia. Lo anterior atendiendo para ello los imperativos establecidos en los artículos 12, 13, 14, 131 y 132 de la citada Ley, como ya quedó establecido anteriormente.

Notifíquese y entréguese por conducto de la Unidad de Transparencia, copia de esta acta al peticionario de las solicitudes de información registradas en la Plataforma Nacional de Transparencia, con los números de folio 00046820, 00047920, 00046920 y 00047020, adjuntando las versiones públicas de su interés, elaboradas por las Juezas Cuarto y Sexto Penal del Partido Judicial de Tijuana. Igualmente deberá notificarse al peticionario de la solicitud registrada con el número de folio 00069020, la autorización de la ampliación de plazo solicitada por las Titulares de la Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura y por la Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas, entregándole copia de esta acta, conforme a la Ley de la materia.

Notifíquese vía correo electrónico a las Titulares de los Juzgados Cuarto y Sexto Penal del Partido Judicial de Tijuana Judicial, con respecto al resultado del procedimiento de clasificación de la información como confidencial realizada por dichas autoridades y la

autorización de las versiones públicas elaboradas, relativas a las declaraciones de las denunciados dentro de las causas penales de interés del peticionario. Asimismo, notifíquese a las Titulares de la Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura y a la Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas, respecto de la autorización de la ampliación de plazo para dar respuesta, para su conocimiento y fines legales correspondientes, haciéndoles saber del nuevo plazo que tienen para remitir la respuesta a dicha Unidad para su procesamiento, entrega y notificación al solicitante..

Sin otro asunto que tratar, se cierra esta sesión, siendo las quince horas del día cuatro de febrero de 2020.



MAGISTRADO SALVADOR JUAN ORTIZ MORALES
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Estado



MAGISTRADO ALEJANDRO ISAAC FRAGOZO LÓPEZ
Adscrito a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia



LIC. FRANCISCO JAVIER MERCADO FLORES
Consejero de la Judicatura



C. P. ROSAURA ZAMORA ROBLES
Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura del Estado

LIC. JESÚS ARIEL DURÁN MORALES
Director de la Unidad Jurídica y Asesoría Interna



M.D. ELSA AMALIA KULJACHA LERMA
Secretaria Técnica del Comité